

FLASHES A.S.E.P.

DICIEMBRE - 2001

FICHA TECNICA

Diseño y Realización: De la investigación, del cuestionario y de la muestra: A.S.E.P.

Diseño Muestral: 1.210 personas de uno y otro sexo, de 18 y más años, residentes en España. Muestra aleatoria estratificada por Comunidades Autónomas y estratos de municipios según su número de habitantes. Selección aleatoria de municipios y secciones censales dentro de cada estrato y de cada Comunidad Autónoma. Selección de hogares mediante sistema de rutas aleatorias dentro de cada sección censal. Selección final del entrevistado en cada hogar mediante cuotas de sexo y edad.

Trabajo de Campo: Realizado durante los días 10 al 15 de diciembre de 2.001, mediante encuesta personal en el hogar de cada entrevistado, por la Red de Intercampo, S.A. Supervisión del trabajo de Campo realizado por A.S.E.P.

Proceso de Datos: Diseñado y realizado por A.S.E.P. con "software" propio, elaborado por J.D. Systems.

Análisis e Informe: Diseñado y realizado por A.S.E.P., y terminado el 27 de Diciembre de 2.001.

**DIRECCION:
JUAN DIEZ NICOLAS**

COPYRIGHT ASEP S.A., 2001. PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, INCLUSO CITANDO LA FUENTE.

"FLASHES"

(DICIEMBRE 2001)

El estado de la opinión pública a lo largo del mes de diciembre, tal y como lo mide el Sistema de Indicadores ASEP, apenas muestra variaciones con respecto al de los meses precedentes. Se observa como una especie de "calma chicha", para utilizar el símil marinero, que sin embargo muestra cierto malestar e insatisfacción general que se manifiesta, como luego se explicará con más detalle, en su evaluación de instituciones y líderes políticos y sociales. Por otra parte, y dentro de ese clima general de estabilidad, se advierte una cierta tendencia a que los indicadores que miden la evaluación del Gobierno y sus líderes disminuyan de manera leve pero persistente de un mes al siguiente, aunque el nivel en que éstos se mueven sea todavía claramente positivo para el Gobierno del PP, debido a las altas cotas alcanzadas durante la legislatura anterior, es decir, antes de las elecciones del 2000.

De manera más concreta, se observa que la satisfacción con el Gobierno, aún siendo claramente positiva (algo que ya de por sí es raro, teniendo en cuenta que se está a mitad de la segunda legislatura), ha disminuido mes a mes desde el índice 123 de septiembre (cuando el horror provocado en la opinión pública por los atentados terroristas sobre los Estados Unidos llevó a los españoles a apiñarse alrededor de su Gobierno) a 113 ahora en diciembre. No es el valor más bajo de los últimos doce meses, pues el índice ha variado a lo largo de todo el año entre 110 y 120, pero sí es el cuarto valor más bajo alcanzado este año, y desde luego está muy por debajo de los valores obtenidos antes de las elecciones del 2000. Algo parecido puede observarse en relación con la valoración del Gobierno (en una escala de 0 a 10 puntos), que con sus 5 puntos este mes tiene el tercer valor más bajo de los obtenidos a lo largo del último año. Y más claro aún resulta cuando se examina la valoración de Aznar, que obtiene este mes su puntuación más baja (4,7 puntos en una escala de 0 a 10) de los últimos doce meses, de manera que sigue estando por debajo de Rodríguez Zapatero (como ha sucedido todos los meses desde septiembre del 2000), y por debajo de Felipe González durante los dos últimos meses de este año (algo que se ha repetido también a lo largo de todo el año, excepto en septiembre y octubre, posiblemente a causa de la crisis internacional originada por los atentados terroristas del 11 de septiembre). Sin embargo, el PP mantiene una cómoda ventaja sobre el PSOE en las estimaciones de voto, de

III

manera que aunque la diferencia de 4,5 puntos porcentuales este mes está 2,6 puntos por debajo de la diferencia realmente obtenida en las elecciones del 2000, se trata de una diferencia importante, teniendo en cuenta que el PP lleva ya cinco años en el poder.

Al contemplar estos datos hay dos preguntas que inmediatamente se presentan ante el investigador. La primera es, ¿por qué parece haberse producido una pérdida de entusiasmo a favor del PP, por qué esa aparente pérdida de imagen?. La segunda es, ¿por qué, a pesar de ello, la opinión pública continúa concediéndole más apoyo que al PSOE?.

En cuanto a la primera pregunta, hay una primera respuesta que parece evidente. Gobernar desgasta, aunque como se ha dicho, la oposición desgasta todavía más. Durante este primer año y medio de su segunda legislatura el PP ha acometido algunas medidas legislativas que se sabía provocarían un fuerte debate político, como eran la Ley de Extranjería e Inmigración, el Plan Hidrológico, la Ley de Universidades, y más recientemente la transferencia de las competencias en materia de sanidad a las Comunidades Autónomas, entre otras. Todas ellas han sido ampliamente debatidas política y socialmente, y por tanto han acumulado críticas y agravios en determinados sectores de la sociedad (pues los que están conformes raramente se manifiestan a favor). Por otra parte, ya se anunció en los Flashes de marzo del 2000 y en varios otros posteriores que la oposición (y de manera más específica el PSOE), centrarían sus críticas al Gobierno en tres áreas especialmente sensibles para la opinión pública, los nacionalismos periféricos, la educación y la sanidad, como así ha sido. Es cierto que no se previó que el PSOE fuese también a utilizar la política exterior para hacer oposición al Gobierno, como se ha puesto de relieve con la reciente visita de Rodríguez Zapatero a Marruecos. Y también es cierto que el Gobierno ha consensuado con el PSOE la política de lucha contra el terrorismo de ETA, la reforma de la justicia, el reparto de puestos en órganos institucionales y algunas otras cuestiones. Es previsible, sin embargo, que durante los dos años y medio que restan de legislatura, el PP procure mostrar su mejor cara, evitando actuaciones y medidas legislativas polémicas, con el fin de preparar su campaña electoral del 2004. Desde esa perspectiva puede decirse que el PP ha pasado ya su peor etapa, y el precio pagado no parece haber sido demasiado alto, a juzgar por los indicadores citados.

En realidad, lo que parece haber tenido más importancia en la relativa pérdida de apoyo popular al Gobierno han sido más las cuestiones de forma que las de

contenido, es decir, las reiteradas alusiones a su incapacidad para el diálogo, su "arrogancia", su "abuso de la mayoría absoluta", etc., cuestiones todas que, en general, apenas ponen en cuestión los contenidos reales de ciertas políticas o medidas legislativas.

Pero, además, la situación económica no ha sido especialmente favorable al Gobierno, especialmente cuando se la compara con la situación económica durante la primera legislatura. La caída de la Bolsa primero y la crisis económica internacional después, han proporcionado graves preocupaciones a la sociedad española, ya que alrededor de un tercio de los hogares tienen ahorros invertidos, directa o indirectamente, en Bolsa. Los dos indicadores principales económicos del Sistema de Indicadores de ASEP, el Sentimiento del Consumidor y la Evaluación de la Situación Económica, han estado por debajo del nivel de equilibrio todo el año 2001, y han alcanzado sus niveles más bajos precisamente en los tres últimos meses. Y el Optimismo Personal, que apenas ha superado el nivel de equilibrio durante todo el año, se encuentra estos dos últimos meses en su nivel más bajo, precisamente en el nivel de equilibrio, en el que los optimistas y los pesimistas tienen un peso igual. Sin embargo, no puede hablarse realmente de "malestar económico" en la población, y de hecho no se escuchan protestas generalizadas como hace años, cuando el paro era realmente preocupante. Además, si se cumplen los vaticinios que pronostican una mejora generalizada de la economía a partir del segundo semestre del 2002, sus efectos se sentirían sobre todo a lo largo del 2003, precisamente antes de la campaña electoral del 2004, lo que beneficiaría al Gobierno.

En cuanto a la segunda pregunta "¿por qué no ha aprovechado el PSOE la pérdida relativa de imagen del Gobierno?", la respuesta parece evidente también: porque el PSOE muestra una gran falta de unidad interna y, todavía, una carencia de auténtico liderazgo, así como una ausencia de programa concreto. La valoración de Rodríguez Zapatero este mes de diciembre es la más baja de los últimos doce meses, y en estos últimos cuatro meses no ha superado a Aznar en más de tres décimas. Además, y a pesar de que el Gobierno ha abordado algunas de las cuestiones legislativas más espinosas, y de haber tenido que enfrentarse a un caso como el de GESCARTERA, la estimación de voto para el PSOE siempre ha sido inferior a la del PP, y la diferencia sólo ha sido inferior a 2,5 puntos en tres ocasiones, precisamente en diciembre del 2000 y en enero y febrero del 2001.

Puede decirse por tanto que, aunque la opinión pública pueda no estar muy satisfecha con el Gobierno del PP, apoya aún menos al PSOE, a juzgar por los datos que se han examinado y otros que se comentan a continuación. Esta situación, que en cierto modo es relativamente nueva en el escenario español, debería ser motivo de reflexión para los dos principales partidos políticos, ya que sobre ellos recae no sólo la responsabilidad de mantener la legalidad y la legitimidad, sino también la credibilidad del sistema democrático español.

Un examen desapasionado de los veinticinco años de democracia en España pone de relieve algunas deficiencias sobre las que parecería conveniente reflexionar. En primer lugar, el electorado comienza a darse cuenta de que los dos principales partidos, el PP y el PSOE, intercambian descaradamente sus discursos según estén en el poder o en la oposición. Pero lo peor no es eso, lo peor es que, al parecer, para el partido que está en el Gobierno, el principal partido de la oposición NUNCA tiene una idea o sugerencia (o enmienda, si es que se trata de discutir un proyecto de ley) que valga la pena aceptar o apoyar. Y para el principal partido de la oposición, cualquier política o proyecto de ley que impulse el Gobierno es, por principio, equivocada y debe ser rechazada. Es incluso muy frecuente que cuando la oposición presenta una enmienda a un proyecto legislativo que el Gobierno considera oportuna, en lugar de aceptarla (¡lo cual sería un precedente al parecer inadmisibile!), la práctica habitual consiste en rechazarla y, simultáneamente, presentar otra enmienda que sólo varía en alguna palabra, pero que es ya una enmienda del propio Gobierno. Todo vale para no aceptar que la oposición pueda hacer alguna contribución constructiva. Esta práctica ha sido habitual cuando gobernaba el PSOE y ahora que gobierna el PP, y además es igualmente frecuente en los parlamentos autonómicos, sea quién sea el partido en el Gobierno o en la oposición. Es cierto que la oposición tiene el deber de oponerse al Gobierno, pero ello no quiere decir que lo tenga que hacer siempre y en cualquier caso. Y es también cierto que el Gobierno tiene el deber de gobernar, pero ello tampoco implica que no pueda a veces aceptar sugerencias, ideas o incluso enmiendas de la oposición, sin que ello menoscabe su autoridad ni su capacidad de gobernar.

En segundo lugar, resulta cuando menos anacrónico que, a estas alturas, cuando se están poniendo los cimientos de una nueva organización política como es la Unión Europea, un partido que ha gobernado España con mayoría absoluta nada menos que durante catorce años, y que previsiblemente volverá a gobernar en el futuro, siga utilizando los nacionalismos y el federalismo como instrumentos para hacer oposición al Gobierno, y que más

recientemente haya aprovechado las relaciones conflictivas con Marruecos para hacer política partidista. Todos los países occidentales democráticos tienen partidos políticos, pero sería difícil encontrar alguno en el que los dos principales partidos sigan enzarzados en la definición de qué es el Estado y cómo se organiza (sólo Bélgica muestra una situación peor que España). Esta es una cuestión pre-constitucional, y por tanto no parece razonable que siga formando parte de la agenda política cotidiana. Recientemente el PSOE, al parecer falto de otros argumentos con los que restarle apoyo electoral al Gobierno, parece dispuesto a utilizar el nacionalismo para obtener mejores resultados, como lo demuestra el discurso de su líder en Cataluña (Pasqual Maragall), su alianza con el BNG en las recientes elecciones gallegas, y su reciente giro respecto al PNV en el País Vasco, manifestado en la oposición sistemática a Redondo Terreros desde las últimas elecciones vascas y que ha culminado con su reciente dimisión. Al analizar los resultados de aquellas elecciones ya se sugirió que cierto sector del PSOE probablemente no había deseado que la opción "constitucionalista" (PP y PSOE) obtuviese mejores resultados que la coalición PNV-EA, pues habrían preferido un pacto con los nacionalistas. Ahora cabe preguntarse, ¿hasta donde estará dispuesto a llegar el PSOE en sus estratégicas relaciones con los nacionalismos para ganar votos?

En el sondeo de este mes se comprueba que más de la mitad de los entrevistados quieren que la organización del Estado siga como hasta ahora, e incluso un 10% adicional desearían que el Estado recupere algunas competencias ya transferidas a las Comunidades Autónomas. Pero sólo un 3% defienden que las Comunidades que lo deseen puedan declararse estados independientes separados de España, y sólo un 7% desea una organización federal para España. El PSOE está internamente dividido (pues el poder de Felipe González sigue muy presente, en detrimento del de Rodríguez Zapatero, que cada día corre más el riesgo de ser el Hernández Mancha del PSOE), y tiene prisa por llegar otra vez al poder, pero sería un error de importantes consecuencias poner en cuestión al Estado. Y el electorado cada vez se cree menos el discurso de que es necesario tender puentes para "atraer" a los que podrían separarse. Ese discurso, en el pasado, no ha hecho otra cosa que alimentar y fortalecer a los nacionalismos excluyentes y separatistas. Se dice que un antiguo ministro de la UCD afirmó en cierta ocasión que prefería "una España roja a una España rota". Esperemos del buen sentido del PSOE que no prefiera ahora "una España rota a una España popular".

La inmensa mayoría de los españoles está totalmente satisfecha con su Constitución, con la forma de Estado y con su organización territorial. Discutan los políticos las políticas concretas sobre educación, sanidad, obras públicas, impuestos y lo que se tercie, pero tengan cuidado de no seguir en un permanente período constituyente, o la población acabará pidiéndoles cuentas. Resulta inaceptable que, cuando un partido no logra sus objetivos por los cauces legalmente establecidos, se amenace con "romper la baraja", como desde hace tiempo está haciendo el PNV. Son muchos los españoles que diferencian claramente entre el nacionalismo vasco y el terrorismo de ETA, como los datos de diciembre vuelven a poner de manifiesto, pero el PNV no puede pretender tampoco estar en el gobierno permanentemente, sin alternativa, y que cualquier cuestionamiento de su hegemonía le induzca a amenazar con la independencia. Es hora de recordar, todos los días, que el PNV no es el pueblo vasco, y que aunque represente a una parte importante de esa sociedad, nunca ha representado a la mitad más uno de los vascos. Y sin embargo, su himno y su bandera son los de la Comunidad Autónoma vasca, lo que de por sí es una muestra de apropiación indebida por parte de un partido, además de una total incongruencia y disparate político. Y el PSOE entrará en un juego peligroso si olvida que lo que diga y defienda en el País Vasco se oirá en toda España.

Estas reflexiones conducen, irremediablemente, al papel de los partidos políticos en la consolidada democracia española. Es preciso recordar que la denominada "sociedad civil" fue la principal protagonista de la transición política, al traer la democracia. Y es de justicia también recordar que los partidos políticos y los sindicatos fueron actores principales de la "sociedad civil", pero no fueron los únicos. Sin embargo, durante estos últimos veinticinco años parece como si la "sociedad civil" se hubiese reducido a partidos políticos y sindicatos, lo que sería un "reduccionismo" no sólo injusto sino sobre todo peligroso, puesto que implicaría el desarrollo excesivo de una parte de la sociedad a costa de la atrofia de todos los demás sectores sociales. El poder que la legislación electoral concedió a las "maquinarias" de los partidos a través del establecimiento de la provincia como circunscripción electoral y del sistema proporcional de representación y, sobre todo, a través de las "listas cerradas", ha provocado un "clientelismo" excesivo. Cada vez que el ciudadano vota a un candidato, como se ha dicho repetidamente, vota a todos los que van en la misma lista, lo que implica que da igual quién vaya en las listas, y poco a poco eso ha llevado a que la mayoría de los representantes en los parlamentos sean "grandes desconocidos" del público que los vota,

pues, salvo algunas excepciones, son meros funcionarios de los partidos, sin personalidad política propia. Como consecuencia, los diputados y senadores no son responsables ante el electorado que los ha elegido, sino ante la "máquina del partido" que los ha puesto en la lista, con lo que la democracia española pierde una de las características principales de la representación, que es la "accountability", es decir, la obligación de rendir cuentas de su gestión ante el electorado, pues las rinden ante los dirigentes de su partido.

Pero el "reduccionismo" no acaba aquí. Lo que ha sucedido a lo largo de estos años es que los partidos y sindicatos, subvencionados y financiados desde los presupuestos del Estado a través de múltiples capítulos, han ido invadiendo todos los ámbitos de la sociedad, desde las asociaciones y ONG's a las fundaciones culturales, colegios profesionales, universidades y cualquier tipo de organización intermedia entre el individuo y el Estado. En otros países, los ciudadanos pueden llevar a cabo su vida personal y participar activamente en su comunidad y en la sociedad sin sentir la necesidad, ni siquiera la conveniencia, de vincularse a un partido político o a un sindicato. En España, eso resulta cada vez más difícil, pues cualquier actividad, local, autonómica o nacional, parece inevitablemente relacionada con los partidos políticos y los sindicatos. Y ello, a pesar de que sólo un 3% de los españoles activos está afiliado a un sindicato, y de que sólo un 1% de los españoles mayores de 18 años esté afiliado a un partido político.

La relación con partidos políticos y sindicatos parece ser el camino más directo para entrar a trabajar en la función pública (local, autonómica y nacional) a través del contrato, posteriormente legitimado por unas adecuadas oposiciones restringidas, con grave agravio hacia quienes todavía creen en las oposiciones públicas y libres para ingresar en los cuerpos de funcionarios. Las elecciones en asociaciones de todo tipo, desde cámaras de comercio hasta colegios profesionales, están indefectiblemente "controladas" por los partidos y sindicatos, que tienen sus candidaturas mas o menos oficiales en todas ellas. La política de partidos afecta a todo, desde el mundo del espectáculo a los medios de comunicación, desde la dirección de los hospitales a los claustros universitarios, desde las cajas de ahorros hasta las ONG's. Y, finalmente, este proceso de hipertrofia de partidos y sindicatos ha llevado al reparto de cargos institucionales no sólo en el Consejo de Radiotelevisión Española, sino en los propios órganos judiciales, como se ha visto recientemente.

Aunque duela mucho reconocerlo, puede que Alfonso Guerra tuviese mucha razón cuando proclamó que Montesquieu había muerto, pues efectivamente en España cuesta cada vez más trabajo reconocer la existencia de una auténtica división de poderes, pues los tres tradicionales parecen ser sólo uno, y el denominado cuarto poder (los medios de comunicación) está cada vez más alineado con unos partidos políticos o con otros. Como ocurre también con las grandes corporaciones empresariales y financieras. Muchos ciudadanos comienzan a percibir que sería conveniente disponer de un sistema de "checks and balances" como el que, con todos sus defectos, ha sido tradicional en la democracia norteamericana. La democracia no puede reducirse sólo a votar cada varios años, sino que debe ejercitarse de manera continuada, para evitar el riesgo del anquilosamiento y la rutina.

Los partidos políticos, precisamente porque actualmente acumulan colectivamente un poder extraordinario, son los que pueden y deben renunciar a parte de ese poder, y devolver al resto de la sociedad civil su protagonismo. No se trata de hacerse ningún "harakiri" como el que hizo otra clase política, sino de adoptar algunas medidas menos drásticas, consistentes en la aprobación de normas legales que establezcan una auténtica división de poderes independientes entre sí con controles mutuos de unos sobre otros, de normas que les obliguen a "auto-excluirse" de ciertos protagonismos innecesarios, a "auto-limitarse" en el ejercicio del poder, como ha hecho, por ejemplo, Aznar, al "auto-limitar" su mandato presidencial a ocho años, incluso contra la voluntad de importantes sectores de su partido. De otro modo, se consolidará la impresión de que la democracia española ha quedado reducida a gran acuerdo entre los principales partidos nacionales (PP, PSOE e IU) y los principales partidos nacionalistas (CiU y PNV), junto con los dos sindicatos principales (CCOO y UGT) para repartirse el "pastel" a través de una "nueva clase" (Djilas *dixit*) de políticos profesionales que, a diferencia de otros tiempos en que se llegaba a los cargos políticos después de haber demostrado la competencia en otros ámbitos, se pretende hoy aprovechar los cargos políticos (obtenidos a través de las burocracias de los partidos) para buscarse un buen refugio en la esfera privada cuando se es cesado.

La democracia española no puede quedar reducida a un intercambio de acusaciones e insultos, carentes de discusión sobre políticas y actuaciones concretas, especialmente en períodos electorales, como si se tratase de combates "amañados" de "wrestling" entre dirigentes políticos y sindicales, como tampoco puede quedar reducida al cotilleo de las "revistas del corazón"

(escritas o audio-visuales). Su consolidación requiere del trabajo continuo de perfeccionamiento día a día, y no solo a través de reformas constitucionales (que habrá que hacer cuando sea necesario), sino de pequeñas reformas de auto-control y de controles mutuos entre órganos del Estado, y sobre todo, del reconocimiento y aceptación de las normas y reglas del juego que a todos obligan, cuando se gana y cuando se pierde. El PP y el PSOE no pueden olvidar nunca que representan conjuntamente a la inmensa mayoría del electorado, y que ambos partidos, también conjuntamente, deben respetar y hacer respetar las reglas del juego, o el pueblo soberano acabará por no respetarles tampoco a ellos. Se ha dicho que, hasta ahora, la democracia española ha sido sobre todo una democracia establecida "de arriba abajo" por una clase política que acertó en conocer lo que demandaba la sociedad española y lo llevó a la práctica. Hora es ya de que comience a ser una democracia "de abajo arriba", en la que la clase política escuche las demandas reales de la sociedad, en lugar de intentar convencerla para que adopte las suyas. No debe olvidarse que los partidos políticos siguen siendo la institución o grupo social peor valorado por los españoles, como confirman los datos de este mes.

Los datos demuestran que la sociedad española está bastante satisfecha de su Constitución, de su forma de Estado, de cómo funciona su democracia, e incluso moderadamente satisfecha con el Gobierno y no está insatisfecha de su situación económica, a pesar de haber estado más satisfecha en otros momentos. Pero esta sociedad española, que ha aceptado estar gobernada por tres partidos diferentes a lo largo de estos veinticinco años de democracia, tiene muy claros sus objetivos principales, y entre ellos se encuentran, sin lugar a dudas, la unidad de España (totalmente compatible con el reparto de competencias entre las tres administraciones central, autonómica y local y con la pertenencia a la Unión Europea, como se acaba de poner de relieve en el importante acuerdo para la transferencia de las competencias en materia de sanidad, y como posiblemente se manifestará en algún tipo de acuerdo para que las Comunidades puedan hacer que se oiga su voz, dentro de la representación del Estado Español en la UE, en aquellas cuestiones que las atañen más directamente), el rechazo total y sin atenuantes al terrorismo de ETA (al que quiere que se combata por métodos legales, pero con endurecimiento de las penas y con el cumplimiento íntegro de las penas), el logro de cierta seguridad y estabilidad económica (nacional y personal), el rechazo a la corrupción (y especialmente a la corrupción política, sea de derechas o de izquierdas, nacional o nacionalista), y el ejercicio de la

tolerancia (hacia las diferentes ideas políticas y religiosas, y hacia las minorías de cualquier tipo, incluidos los inmigrantes). Las victorias electorales del PP, y especialmente la del 2000, se explican en gran medida porque este partido supo convencer a una mayoría del electorado de su disposición a cumplir esos objetivos (y de su empeño real por cumplirlos en su primera legislatura). Si el PSOE quiere ganar las próximas elecciones, posiblemente tendrá que convencer al electorado de su capacidad para cumplir mejor que el PP esos objetivos, no de que pretenderá cumplir otros objetivos. Y si el PP quiere ganar las próximas elecciones tendrá que convencer al electorado de sus razones para no haber cumplido mejor de lo que lo ha hecho algunos de esos objetivos, y de su capacidad para cumplirlos mejor que el PSOE en el futuro.

En el ámbito internacional, poco hay que añadir a lo ya dicho en los Flashes de noviembre. La guerra de Afganistán ha dejado de ser noticia de portada en los medios de comunicación, pero Ben Laden ha reaparecido en video en la cadena Al Yazira (de Qatar) cuando ya se le daba por muerto, y los Estados Unidos, que después de su intervención en la guerra del Golfo de 1991 lograron establecer bases militares permanentes en Kuwait y Arabia Saudita, ahora las han establecido también en Afganistán, Pakistán y Uzbekistán. Ya ha iniciado la persecución de Al Quaida en Yemen, y todo indica que se seguirá la pista de esa organización terrorista y de Osama Ben Laden en ese país, así como en Somalia y Sudán, por lo que son de esperar nuevas acciones bélicas en esos países a principios de año. Por otra parte, sus servicios de información ya han anunciado que las principales ciudades europeas pueden ser objeto de ataques terroristas. Resulta admirable la capacidad de esos servicios de inteligencia para predecir ciertos acontecimientos, para hacerse con videos auténticos de Ben Laden admitiendo todos sus crímenes, para lograr incluso muestras de su ADN, y por el contrario su gran incapacidad para detectar, anticipar y prevenir el indescriptible horror de las Torres Gemelas. La reactivación del conflicto entre Pakistán e India, dos países con armamento nuclear, puede constituir el inicio de una "nueva actuación" de los Estados Unidos en esa área, para garantizar su seguridad, y en ese conflicto resulta poco previsible que los Estados Unidos respalden a Pakistán.

Por otra parte, en el año y medio transcurrido desde que Sharon hizo imposible el acuerdo Israel-Palestina al irrumpir en la Explanada de las Mezquitas (cuando la fecha de la proclamación del Estado Palestino estaba prácticamente decidida), alentando así la Segunda Intifada, y mientras se discute si "son galgos o podencos" en inacabables reuniones internacionales,

los ejércitos israelíes están exterminando implacablemente a la que podría haber sido la oficialidad de un futuro ejército palestino, además de a una población civil que tiene que luchar con piedras frente a los tanques, y que por toda fuerza aérea disponía (ya no) de tres helicópteros. Cuando por fin se llegue a un alto el fuego por ambas partes, Israel seguirá siendo un Estado con unas Fuerzas Armadas bien organizadas y dotadas de armamento (incluido el nuclear, por supuesto), mientras que Palestina, aún en el caso de que llegue a ser reconocido como Estado, no dispondrá de unos mandos suficientemente cualificados no ya para un ejército convencional, sino ni siquiera para una fuerza de policía interior. Por otra parte, Ben Laden ha prestado un "flaco servicio" a Palestina al defender su causa en el último video que acaba de difundir Al Yazira. En cuanto a las resoluciones de las Naciones Unidas para esa zona, nadie se acuerda ya ni de cuando se adoptaron, y desde luego nadie pretende que se cumplan.

En este panorama internacional, sin embargo, y a pesar de todos los obstáculos que ha tenido que superar, el euro iniciará su andadura el 1 de enero del 2002, tal y como se había previsto. Y a Aznar le corresponderá presidir la Comisión Europea precisamente en los seis primeros meses de vigencia de la moneda única. Tanto Aznar como Europa van a necesitar mucha suerte para poder desarrollar su cometido en una situación internacional tan convulsa y poco favorable. Esperemos que la tengan.

EL CLIMA DE OPINION

La ausencia de cambios, la total estabilidad, es el rasgo que caracteriza por encima de cualquier otro a la evaluación que hacen los españoles de la situación económica, social y política. Durante tres meses consecutivos el Sentimiento del Consumidor está fijo en el mismo valor, algo por debajo del nivel de equilibrio, valor que por otra parte es el más bajo de los últimos doce meses, aunque ha estado por debajo del nivel de equilibrio durante todo el año precedente (con la única excepción del mes de marzo, cuando el valor del índice fue exactamente el de equilibrio, en el que los que tienen confianza igualaron a los que no tienen confianza en la situación económica). Algo parecido puede afirmarse del índice que mide la Evaluación de la Situación Económica, si bien en este caso los datos de los tres últimos meses no son exactamente iguales, aunque los valores son parecidos. En este caso, también, los valores obtenidos durante los tres últimos meses han sido inferiores al nivel de equilibrio (más bajos aún que el Sentimiento del Consumidor), pero

son también los tres más bajos de los últimos doce meses. Ambos indicadores continúan, por tanto, persistentemente por debajo del nivel de equilibrio, y sugieren inequívocamente que los españoles están preocupados por el presente y el futuro de la situación económica nacional (debido, probablemente, a la crisis económica internacional), pero esta falta de confianza se ha estado manifestando desde el otoño del 2000, por lo que no parece ser consecuencia de la incertidumbre creada por la situación internacional que siguió a los atentados del 11 de septiembre, aunque sí pueda haber sido reforzada por ella. Los dos indicadores de ahorro (Propensión al Ahorro y Proporción de Ahorradores), fluctúan en sus niveles habituales, sin seguir una pauta creciente o decreciente concreta.

El índice de Optimismo personal continúa este mes exactamente en el nivel de equilibrio, como ya se observó en noviembre, lo que sugiere que los españoles comienzan a percibir riesgos para su propia situación económica personal a causa de la situación internacional. Este nivel, por otra parte, es el más bajo de los últimos doce meses, por lo que parece previsible que en los próximos meses también se sitúe por debajo de ese nivel, indicando más desconfianza que confianza en la situación económica personal. Los restantes indicadores sociales no varían respecto a meses anteriores.

En lo que respecta a los indicadores políticos, se mantiene en los altos niveles habituales la Satisfacción con el Funcionamiento de la Democracia, pero vuelve a disminuir otra vez la Satisfacción con el Gobierno, que ha perdido así diez puntos desde septiembre, cuando la satisfacción (¿el apoyo?) experimentó un fuerte incremento, posiblemente a causa del temor experimentado por la sociedad española a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Se vuelve, por tanto, a la situación anterior al verano, caracterizada por una satisfacción en claro descenso, aunque no puede dejar de subrayarse que está en niveles moderadamente altos, indicando que hay claramente más satisfechos que insatisfechos con el Gobierno. La alineación política, las actitudes hacia la integración española en la Unión Europea y el posicionamiento medio en las escalas de ideología y de sentimiento nacionalista, se mantienen sin embargo en sus niveles habituales.

En cuanto al índice de exposición a la información, se mantiene en el bajo nivel ya observado el mes pasado, y que es considerablemente más bajo que el año pasado.

El ranking en la valoración de instituciones de este mes es el siguiente: La Corona (6,8 puntos en una escala de 0 a 10 puntos), la Constitución y los Médicos (6,7 en ambos casos), las Fuerzas Armadas (5,3), el Gobierno de la Nación (5,0 puntos), los Bancos (4,7) y los Políticos (4,0 puntos). De las instituciones fijas, cabe destacar la pérdida de 5 décimas por parte de los Bancos respecto al mes pasado, si bien también el Gobierno de la Nación y las Fuerzas Armadas han perdido una décima cada una, mientras que La Corona es la única institución que mantiene su valoración del mes pasado. Pero, entre las instituciones no fijas, debe subrayarse la pérdida de cuatro décimas en la valoración de la Constitución respecto a la última vez que se preguntó por esta institución, en diciembre del 2000 (pérdida que parece atribuible a la polémica suscitada por la polémica surgida respecto a si debería o no ser reformada), la pérdida de tres décimas en la valoración de los Médicos, y la pérdida de una décima en la valoración de los Políticos (que es la más baja de todas las instituciones por las que se pregunta cada año).

En cuanto a la imagen de personajes públicos, el ranking de valoración de este mes es el siguiente: El Rey Juan Carlos (7,2 puntos en una escala de 0 a 10 puntos), el Príncipe Felipe (6,9), Rodríguez Zapatero (5,0), Felipe González (4,9), José M^a Aznar (4,7), Gaspar Llamazares (4,1) y George W. Bush (3,8 puntos). Debe subrayarse que todos los personajes públicos por los que se ha preguntado este mes, sin excepción, reciben puntuaciones más bajas que la última vez que se preguntó por ellos, tanto cuando esa última vez es el mes pasado como cuando se trata de hace un año. Naturalmente, cuanto más alta fue la última valoración mayor es la pérdida absoluta de valoración. Pero esa menor valoración general de los personajes públicos debe interpretarse, sobre todo cuando se acaba de comentar la misma disminución de valoración respecto a las instituciones, como un indicador de descontento e insatisfacción de la sociedad española, insatisfacción que posiblemente se manifiesta en falta de confianza en las instituciones públicas y en una sensación de "malestar" generalizado. Debe subrayarse también, por otra parte, que la valoración de Aznar, por segundo mes consecutivo, vuelve a estar por debajo de la de Felipe González, y por supuesto, por debajo de la de Rodríguez Zapatero, aunque la distancia que le separa de éste sea más baja estos últimos tres meses (tres décimas este mes) que en los meses anteriores al verano (cuatro o más décimas habitualmente). En todo caso, tanto Aznar como Rodríguez Zapatero y Llamazares obtienen este mes su valoración más baja de los últimos doce meses, y Felipe González la segunda más baja de ese mismo período.

Finalmente, la estimación de voto de este mes concede al PP una ventaja de cuatro puntos porcentuales sobre el PSOE (tres puntos menos que en las elecciones de marzo del 2000, dos puntos menos que el mes pasado, y cinco puntos menos que en septiembre, cuando el Gobierno recibió un amplio respaldo de la sociedad española después de los atentados del 11 de septiembre). Y debe tomarse en cuenta que la estimación de voto de este mes incluye asimismo una estimación de la abstención que es igual a la realmente observada en las elecciones del 2000.

LA ACTUALIDAD

Los temas que se han abordado en la actualidad del mes de octubre se han centrado en la guerra de Afganistán, el conflicto de Palestina, la lucha contra el terrorismo de ETA, los problemas entre España y Marruecos, y el debate sobre la reforma de la Constitución Española.

La Lucha contra el Terrorismo y la Guerra de Afganistán

Se ha vuelto a preguntar este mes por un conjunto de cuestiones relativas a la lucha contra el terrorismo internacional y la guerra de Afganistán, utilizando para ello la escala de cinco posiciones desde "muy de acuerdo" a "muy en desacuerdo", resumida en el índice de Acuerdo-Desacuerdo (medido por la diferencia entre los que están de acuerdo con cada frase y los que están en desacuerdo, sumando 100 al resultado para que la escala varíe entre 0 y 200 puntos, con punto de equilibrio en 100). Se ha podido así confirmar el acuerdo muy mayoritario con las siguientes afirmaciones:

	Oct.	Nov.	Dic.
Los Estados Unidos van a lo suyo, y les importan poco Europa o los países árabes	-	135	147
Habría que reconocer internacionalmente al Estado Palestino	133	133	135
No están suficientemente claros los motivos ni los objetivos que se persiguen con el inicio de esta guerra	126	120	117

Pero la opinión pública es más controvertida, aunque con ligero predominio de los que están de acuerdo, con la afirmación siguiente:

	Oct.	Nov.	Dic.
Cada vez está más claro que la Unión Europea no es una potencia mundial que pueda competir con EEUU	116	107	105

Y es también controvertida, pero con ligera tendencia al desacuerdo, respecto a que:

	Oct.	Nov.	Dic.
Se diga lo que se diga, es inevitable una confrontación entre la civilización occidental y el mundo islámico	95	87	85

El desacuerdo es mayoritario respecto a las siguientes cuestiones:

	Oct.	Nov.	Dic.
España debe aportar tropas para que participen activamente en las operaciones militares contra Afganistán y otros países	76	56	53
Para luchar contra el terrorismo islámico es imprescindible utilizar la "guerra sucia" y dejarse de legalismos	73	69	69
El inicio (La continuación) de los bombardeos sobre Afganistán	70	48	45
Se debe ampliar el ataque militar a otros países de Oriente Medio	43	40	39

Los datos de este mes, como puede comprobarse, son muy similares a los de meses anteriores, de manera que los índices son casi idénticos. No obstante, debe resaltarse el incremento en el rechazo a que España aporte tropas para que "participen activamente en las operaciones militares contra Afganistán y otros países", en que se utilice la "guerra sucia contra el terrorismo islámico", en que se continúen "los bombardeos sobre Afganistán", y en que se amplíe el ataque militar a otros países de Oriente Medio. Coherentemente, cada vez se afianza más la percepción de que los EEUU van a lo suyo, y que habría que reconocer al Estado Palestino.

Como ya se indicó el mes pasado, la opinión pública española suele manifestarse generalmente en contra de toda intervención militar (como ya lo hizo en relación con la Guerra del Golfo, con los sucesivos ataques norteamericanos contra Irak, con la intervención en Bosnia y con la intervención en Kosovo), y en esta ocasión esa opinión contraria se vuelve a poner de relieve, y aumenta cuanto mayor es el tiempo transcurrido desde los atentados terroristas sobre Estados Unidos el pasado mes de septiembre.

De manera más precisa, puede afirmarse que casi tres de cada cuatro españoles se oponen a la continuación de los bombardeos sobre Afganistán, a la ampliación de la guerra a otros países de Oriente Medio, y a que España aporte tropas para participar activamente en las operaciones militares contra Afganistán y otros países. Además, dos terceras partes de la población cree que los Estados Unidos van a lo suyo sin importarles ni Europa ni los países

árabes, y alrededor de la mitad piensan que habría que reconocer internacionalmente al Estado Palestino.

Por otra parte, la adopción de medidas por parte de Estados Unidos para garantizar una mayor seguridad a su población a costa de ciertas libertades cívicas no parece recibir el respaldo de la opinión pública española. En efecto, los resultados de este mes son idénticos a los del mes pasado, de manera que un 44% de los entrevistados consideran poco o nada justificados los recortes a la libertad que se están adoptando en Estados Unidos (violación del secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas y electrónicas, detención e interrogatorio de extranjeros sin que existan acusaciones concretas, registro de domicilios sin permiso judicial, etc.).

Una proporción aún mayor (47%) consideraría poco o nada justificado que el Gobierno español adoptara medidas similares para luchar contra el terrorismo de ETA y proteger a los españoles contra el terrorismo, también como el mes pasado.

Teniendo en cuenta, sin embargo, que la guerra de Estados Unidos contra Afganistán (pues hablar de una guerra de los Ejércitos Aliados es un eufemismo, ya que los Estados Unidos están llevando esta guerra sin contar con nadie, ni siquiera con sus aliados tradicionales, los británicos) dura ya tres meses, y ante las noticias de una posible e inminente ampliación de las operaciones militares a otros países de la zona, como Somalia, Sudán y Yemen, ha parecido conveniente preguntar por algunas otras cuestiones relacionadas con ese conflicto. Así, en primer lugar se ha preguntado por la evaluación que los españoles hacen de la actuación de diferentes países en la Guerra de Afganistán, utilizando para ello una escala de 0 a 10 puntos. El resultado ha sido que la evaluación muestra el siguiente ranking: España (4,5 puntos en una escala de 0 a 10 puntos), Estados Unidos (4,2), Reino Unido (4,0), la Alianza del Norte Afgana (3,9), Pakistán y Rusia (3,7), y el régimen talibán que había en Afganistán (1,5 puntos). Es evidente, por tanto, que la crítica que los españoles hacen a los Estados Unidos no significa en absoluto que se defiendan a los talibanes o, en su caso, a Osama Ben Laden, puesto que la valoración que se da a ese régimen es absolutamente muy baja. Pero la censura al régimen talibán no implica, por su parte, un respaldo a la actuación que los diversos países, incluidos Rusia y Pakistán, están teniendo en aquella zona. La crítica alcanza, incluso, a España, que aunque no ha enviado todavía

tropas, ha mostrado claramente, a través de su Gobierno, su total respaldo a las actuaciones de los Estados Unidos.

Un 45% de los entrevistados, por otra parte, consideran "muy", "bastante" o "algo" probable la intervención armada de los Estados Unidos sobre algún otro país de esa zona de Oriente Medio, mientras que sólo un 33% la considera "poco" o "nada" probable.

Y el país con más probabilidades de ser atacado por los Estados Unidos (según la opinión de quienes creen probable ese ataque, y mediante pregunta abierta), es con gran diferencia Irak (41%), y en mucha menor medida Pakistán (14%) e Irán (11%)

El Conflicto de Palestina

Este mes se ha preguntado también por el conflicto de Palestina, puesto que la situación creada entre Israel y Palestina es prácticamente la de una guerra no declarada, pero efectiva.

La opinión pública española está claramente más a favor de Palestina que de Israel, como demuestran los siguientes datos. En primer lugar, y utilizando una escala de 0 a 10 puntos, se pidió a los entrevistados que señalaran qué grado de razón tiene cada uno de los dos países en dicho conflicto, con el resultado de que asignaron 5,0 puntos a Palestina y 3,8 a Israel, lo que implica una clara preferencia por Palestina. Pero además, cuando utilizando una escala similar se preguntó por cuál de los dos países tenía mayor grado de culpabilidad, los españoles asignan un 5,9 a Israel y un 4,8 a Palestina, lo que demuestra una vez más la preferencia por Palestina. En otras palabras, la opinión pública española estima que Palestina tiene más razón que Israel, y que Israel es más culpable que Palestina, en relación con el conflicto en el que ambos países se encuentran inmersos.

Además, cuando se pregunta por la posible solución al conflicto, casi la mitad de los entrevistados no dan ninguna respuesta, pero de los que contestan, más de la mitad (una cuarta parte del total de la muestra) afirman que la solución para frenar los conflictos entre Israel y Palestina es "cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas", y una proporción muy inferior (11%) afirman que la solución consiste en "acabar con el terrorismo islámico".

La Lucha contra el Terrorismo de ETA

La reacción internacional contra el terrorismo de esa misma escala ha hecho que la opinión pública internacional, y con mucho mayor motivo la española, se plantee también la política a seguir respecto al terrorismo específico de ETA que sufre el pueblo español desde hace más de cuarenta años. Mediante una técnica igual a la anteriormente descrita, consistente en la expresión de acuerdo o desacuerdo con determinadas frases, se ha podido comprobar que entre dos tercios y tres cuartas partes de los entrevistados opinaron sobre todas las cuestiones relativas al terrorismo. A continuación se muestran las diferentes cuestiones por las que se ha preguntado, ordenadas desde la que recibe el máximo acuerdo hasta la que recibe el máximo desacuerdo en este sondeo de noviembre, pero ofreciendo también el grado de acuerdo que obtuvieron en octubre si es que entonces se formuló también esa cuestión:

	Oct.	Nov.	Dic.
No debe confundirse el terrorismo de ETA con el nacionalismo vasco	144	145	153
Se debe ilegalizar a Batasuna porque está demostrada su relación con ETA	-	-	147
Todos los terrorismos son iguales, y por tanto se debe luchar con los mismos métodos contra todos ellos	127	120	120
El Gobierno Español está legitimado para luchar, incluso con la violencia, contra los terroristas y contra quienes les ayudan	108	106	104
Para luchar contra el terrorismo de ETA debería utilizarse la "guerra sucia" y dejarse de legalismos	81	84	81
El terrorismo de ETA es más explicable que el terrorismo islámico, pues sus orígenes son diferentes	65	58	48

Los datos de este mes confirman los de meses anteriores en el sentido de que existe un acuerdo muy mayoritario en no confundir el terrorismo de ETA con el nacionalismo vasco. Pero, casi con la misma intensidad, los españoles estiman que se debe ilegalizar a Batasuna por su relación con ETA. Se acepta también mayoritariamente que todos los terrorismos son iguales y se rechaza que el terrorismo de ETA sea más explicable que el terrorismo islámico. Finalmente, se reconoce que el Gobierno Español está legitimado para utilizar la violencia contra los terroristas y quienes les ayudan, pero se rechaza la utilización de la denominada "guerra sucia" contra ETA (como también se rechazó mayoritariamente, e incluso en cierta mayor medida, contra el terrorismo islámico).

Todos los resultados de este mes son casi idénticos a los obtenidos en octubre y noviembre, lo que constituye una garantía de fiabilidad de los resultados, así

como de estabilidad de las actitudes de los españoles hacia el terrorismo de ETA.

Se han repetido las preguntas ya incluidas en noviembre relativas a algunas posibles medidas que el Gobierno Español podría adoptar para luchar contra el terrorismo de ETA. Concretamente, se ha utilizado una escala de cinco puntos para medir el grado de justificación concedido por los españoles a algunas de esas medidas (desde "muy justificable" a "nada justificable"), obteniéndose los siguientes resultados:

- Un 86% de los españoles mayores de 18 años (83% en noviembre) consideran muy o bastante justificable "hacer que los terroristas cumplan las penas íntegras, sin reducción de ningún tipo".
- Un 75% (73% en noviembre) consideran muy o bastante justificable "implantar la cadena perpetua para los terroristas de ETA convictos de crímenes de sangre".
- Un 65% (61% en noviembre) consideran poco o nada justificable "conceder la independencia al País Vasco".
- Y alrededor de la mitad de los entrevistados consideran poco o nada justificable "declarar el estado de excepción en el País Vasco", "acercar los presos de ETA al País Vasco", e "implantar la pena de muerte para los terroristas de ETA convictos de crímenes de sangre".

Por otra parte, este mes se ha preguntado a los entrevistados que señalen los países que más están colaborando más con el Gobierno Español contra el terrorismo de ETA. En realidad, los españoles sólo perciben a Francia como país que colabora con España en su lucha contra el terrorismo de ETA, de manera que un 58% creen que Francia colabora mucho o bastante. Pero alrededor de un 60% estiman que Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Italia, Israel, Portugal o Rusia colaboran poco o nada.

De manera similar, se preguntó por el grado de colaboración de los diferentes partidos políticos españoles con el Gobierno de la Nación en la lucha contra el terrorismo de ETA. Un 68% de los entrevistados opina que el PSOE colabora mucho o bastante, y algo menos del 50% creen que IU y CiU colaboran también mucho o bastante, pero más de tres cuartas partes de ellos creen que el PNV, EA o Batasuna colaboran poco o no colaboran nada en absoluto.

Los Problemas entre España y Marruecos

Las relaciones entre España y Marruecos están pasando por una etapa muy delicada desde el pasado mes de agosto.

Cuando se pregunta a los entrevistados (como ya se hizo en noviembre) si se consideran más cerca de las opiniones expresadas por el Gobierno Español o de las expresadas por el Gobierno de Marruecos en relación con seis cuestiones concretas (tensiones por la pesca en las costas marroquíes, soberanía de Ceuta y Melilla, futuro del Sahara, inmigración ilegal hacia España, tráfico de drogas hacia España, y críticas de la prensa española al Rey de Marruecos), los resultados demuestran un apoyo muy mayoritario en todos los casos a la postura del Gobierno Español (como en noviembre), que es máxima en relación con el tráfico de drogas hacia España, y algo menor en relación con el futuro del Sahara. Concretamente, utilizando una escala de 0 a 10 puntos en la que el 0 significa que se está más cerca del Gobierno Español y el 10 que se está más cerca del Gobierno de Marruecos, las diferencias observadas varían entre 2,0 puntos en el caso del tráfico de drogas y 2,7 puntos en el del futuro del Sahara, lo que en ambos casos significa un fuerte respaldo a las posiciones del Gobierno Español.

De manera más específica, y en relación con la hipótesis de que Marruecos pretendiese conquistar Ceuta y Melilla por la fuerza, algo menos de uno de cada cinco españoles no parece tener formada una opinión, pero casi uno de cada dos cree que habría que "ponerse de acuerdo con Marruecos para hacer un referéndum en esas dos ciudades con el fin de que los ciudadanos decidan", mientras que un 16% creen que habría que defender esas ciudades incluso con las armas, y otro 16% opinan que habría que defenderlas mediante cualquier concesión que no implicase entregar las ciudades, y sólo un 10% estarían dispuestos a entregar a Marruecos esas dos ciudades, la mitad de ellos en el supuesto de que las concesiones exigidas por Marruecos para no insistir en la entrega fuesen excesivas, y la otra mitad en el supuesto de que España pudiese lograr concesiones importantes en otras áreas a cambio de entregar las dos ciudades. Todos estos resultados son prácticamente iguales a los obtenidos en noviembre.

En cuanto al conflicto en el antiguo Sahara español, el 35% de los entrevistados no opinó sobre lo que debería hacer España. Pero un 40% creen que lo que debe hacer España es "apoyar y defender el cumplimiento de las

resoluciones de las Naciones Unidas respecto al Sahara", e incluso un 10% opinan que debería "desentenderse por completo del Sahara y dejar que decidan los países implicados", mientras que proporciones muy pequeñas, iguales o inferiores en todo caso al 10%, opinan que España debería "defender al POLISARIO frente a Marruecos", "defender a Marruecos frente al POLISARIO", o "recuperar el Sahara para España como protectorado". Debe aclararse, sin embargo, que cuando se elaboró el cuestionario de diciembre no se había anunciado todavía la visita que Rodríguez Zapatero iba a hacer a Marruecos, para entrevistarse con el Rey Mohammed VI.

El Debate sobre la Reforma de la Constitución Española

Al cumplirse un nuevo aniversario de la aprobación de la Constitución Española por referéndum, y teniendo en cuenta los debates públicos que durante el último año parecen haberse recrudecido respecto a su reforma (quieren hacerlo, y por distintas razones, los nacionalistas, los socialistas y los de Izquierda Unida), pareció conveniente preguntar por la opinión de los españoles sobre esta cuestión.

Ante todo debe indicarse que un 53% de los entrevistados contestaron que, si se repitiese el referéndum sobre la Constitución, votaría con toda seguridad a favor de ella, y un 30% adicional afirman que probablemente también votarían a favor. En realidad, sólo un 5% dicen que probablemente votarían en contra, y un 3% contestan que votarían en contra con toda seguridad.

Por otra parte, sólo un 8% de los entrevistados consideran muy urgente la reforma de la Constitución, aunque un 26% adicional lo consideran algo urgente, pero un 32% lo consideran poco urgente, y un 20% creen que la reforma de la Constitución no es urgente en absoluto.

Por último, y en relación con el Título IV de la Constitución, que es el que parece tener mayores partidarios de su reforma, sobre todo por parte de los nacionalistas, se ha repetido una pregunta ya tradicional en los estudios de ASEP, relativa a la organización del Estado.

Como puede comprobarse, más de la mitad de los entrevistados prefieren que todo siga como hasta ahora, e incluso un 10% quisieran que el Gobierno de la Nación recupere algunas competencias ya traspasadas a las Comunidades Autónomas. Debe recordarse que hace tan solo 5 años, las proporciones

respectivas eran del 35% y del 13%, lo que sugiere que se ha producido un gran incremento en la proporción de españoles que desean que todo siga igual que hasta ahora, sin cambios.

Por el contrario, la proporción que desearía una Administración Unica ha disminuido desde un 20% a un 10% en estos últimos 5 años, la proporción que desearía un Estado Federal ha disminuido del 11% al 7%, y la proporción que opina que las Comunidades Autónomas que lo deseen deberían poder declararse independientes ha disminuido también del 6% al 3%. En resumen, los españoles parecen mayoritariamente bastante satisfechos con la actual organización del Estado, y aunque los que querrían mayores competencias (incluso la independencia) para las Comunidades Autónomas nunca fueron más que una minoría que apenas superaba un tercio de los entrevistados, su peso relativo ha disminuido aún más hasta un 20%.

Finalmente, se ha preguntado también por la forma misma de Estado, comprobándose que un 77% de los entrevistados desearía que España siga siendo una Monarquía, (incluso un 4% adicional lo desearía mientras viva el Rey Juan Carlos), frente a sólo un 10% que querría que España fuese una República.